

Gaceta de



Puerto-Rico.

Year 1900—Office, Fortaleza 21

MONTHLY SUBSCRIPTION

| | |
|--|---------|
| Municipalities and Public Offices..... | \$ 2.00 |
| Private persons..... | 1.50 |
| Single copies..... | .10 |

Published daily except Mondays

Año 1900—Oficinas, Fortaleza 21.

SUSCRIPCION MENSUAL

| | |
|--|---------|
| Municipalidades y oficinas públicas..... | \$ 2.00 |
| Personas particulares..... | 1.50 |
| Números sueltos..... | .10 |

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. as Second class matter.

Year 1900

San Juan Puerto-Rico, Wednesday June 6th

No. 130

PARTE OFICIAL

Office of the Treasurer of Porto Rico

San Juan, Porto Rico, June 4, 1900.

Circular No. 8.

1.—The internal revenue tax on alcoholic liquors imposed by virtue of General Orders No. 176, series of 1899, and by the Act of Congress approved April 12, 1900, shall be paid, unless heretofore collected, on all alcoholic liquors, manufactured in Porto Rico or imported into Porto Rico, by the affixture of a three (3) cent internal revenue stamp on every package containing one litre or less, and at the rate of three (3) cents per litre, or fraction thereof, on every package containing more than one litre.

2.—On all stocks of bottled liquors now on hand and exposed for retail sale internal revenue stamps in the proper amount must be affixed to each bottle.

3.—For all stocks of bottled liquors in original packages and designed for wholesale delivery the requisite amount of three (3) cent stamps must be purchased and kept in the possession of the owner, or person in charge of such stocks. With every sale from out such stocks of bottled liquors delivery must be made by the seller of a corresponding number of three (3) cent estamps, which must be affixed by the retailer to each bottle before exposing same to sale.

J. H. HOLLANDER,
Treasurer.

Tesorería de Puerto-Rico.

San Juan, Puerto-Rico Junio 4 de 1900.

Circular número 8.

1. La contribución de Renta Interna sobre licores alcohólicos, impuesta por virtud de la Orden General número 176, serie de 1899, y del Acta del Congreso aprobada en Abril 12, 1900, se pagará, á no ser que ya se hubiese recaudado, por todos los licores alcohólicos fabricados en Puerto-Rico ó importados en Puerto-Rico,—mediante la fijación de un sello de Renta Interna, de tres (3) centavos á cada envase que contenga un litro ó menos, y á razón de tres (3) centavos por cada litro ó fracción de litro, en cada envase que contenga más de un litro.

2.—Todas las existencias actuales de licores embotellados y expuestos al público para la venta al detalle, deben llevar puestos sellos de Renta Interna, adhiriéndole á cada botella el sello ó los sellos correspondientes.

3.—Para toda existencia de licores embotellados en sus envases originales, y destinada á expendirse al por mayor, la cantidad que requiera de sellos de tres (3) centavos habrá de comprarse y guardarse en posesión de su dueño ó de la persona encargada de tales existencias. Con cada venta de dichas existencias de licores embotellados, el vendedor ha de entregar el número correspondiente de sellos de á tres (3) centavos, los cuales deben distribuirse por el detallista entre las botellas, fijando en cada una el suyo ó los suyos, antes de exponerlas á la venta.

J. H. HOLLANDER,
Tesorero.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, á once de Mayo de mil nove-

cientos, en los autos de juicio ejecutivo seguidos en el suprimido Juzgado de 1ª Instancia del Distrito de San Francisco de esta Capital y en el Tribunal del Distrito de San Juan, por Don Juan Pizá y Más, vecino y comerciante de esta Ciudad, con la sociedad mercantil Homar y Montaner, domiciliada en la Ciudad de Utuado, en cobro de pesos, autos pendientes ante Nos en recurso de casación por infracción de Ley, que ha interpuesto la parte demandada, representada y defendida por el Letrado Don Herminio Díaz Navarro, sin que haya comparecido ante este Tribunal la parte actora y re nuda. — Resultando que Don Juan Pizá y Más, en 14 de Diciembre de 1898, acudió al Juzgado de 1ª Instancia de San Francisco con dos pagarés suscritos á su favor por Homar y Montaner, el primero de ellos, en 11 de Septiembre de 1897, por valor de 135 pesos 96 centavos, que dicha sociedad se obligaba á pagar en igual día y mes del año siguiente, de cuya suma solo adelantaba ya 93 pesos 73 centavos; y el segundo, en 20 de Agosto de 1898, por valor de 1968 pesos 35 centavos, que también Homar y Montaner se comprometían á satisfacer en 23 de Noviembre del mismo año, solicitando Pizá y Más, con objeto de preparar la vía ejecutiva, que Homar y Montaner reconocieran la legitimidad de sus firmas, y sin perjuicio de ello, que se despachara por creencia y riesgo del acreedor embargo preventivo contra los bienes de los deudores por la suma de 2062 pesos 8 centavos, que montaba la deuda, á cuyo embargo se accedió por auto del mismo día. Levándose á efecto el día 22 del propio mes.— Resultando que por auto de 16 de Diciembre citado se ordenó el reconocimiento por Homar y Montaner de los dos documentos de crédito de que se deja hecho mérito, y como no comparecieron, á pesar de haber sido citados por tres veces, en la segunda y tercera con apercibimiento de ser declarados confesos en la legitimidad de sus firmas, se hizo tal declaratoria por auto de 25 de Enero de 1899.— Resultando que en escrito de 26 de dicho Enero el acreedor Don Juan Pizá y Más formuló demanda ejecutiva contra Homar y Montaner para el cobro de la cantidad de 2062 pesos 8 centavos que le estaba adeudando, alegando como fundamentos de hecho de la demanda los que se dejan expuestos; y por auto del día siguiente se despachó la ejecución por la referida suma, 300 pesos más en concepto de intereses, y otros 200 pesos para costas, ratificándose además el embargo preventivo practicado.— Resultando que citada de remate la sociedad deudora, se opuso á la ejecución y al formalizarla expuso: que la sociedad Homar y Montaner se presentó en suspensión de pago en 19 de Diciembre de 1893, cuyo estado jurídico fué declarado por el Juzgado de 1ª Instancia de Utuado; que dicha suspensión impedia que la citada sociedad pagara las deudas que tenía contraídas, pues de hacerlo sería con perjuicio de sus acreedores; que después de celebrada la junta de éstos, para la cual citó Pizá, y obtenido convenio, se libró mandamiento de ejecución contra la sociedad deudora, y por no satisfacer la deuda, por hallarse en suspensión de pagos, se le embargaron bienes para responder de la misma; y que el título en que se fundaba la ejecución carecía de fuerza ejecutiva, por no ser exigible la obligación en atención á que Homar y Montaner se hallaban en estado de suspensión de pagos; por todo lo cual, invocando además como fundamentos de derecho el artículo 1465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de España de 4 de Octubre de 1889 y 14 de Marzo de 1896, pidió se declarara en su oportunidad la nulidad del juicio, y si á ello no hubiere lugar, la nulidad del mandamiento de ejecución y de todas las actuaciones posteriores con las costas á cargo de la parte ejecutante.— Resultando que Don Juan Pizá y Más impugnó la oposición formulada sosteniendo la eficacia del título ejecutivo, que lo eran dos pagarés por cantidad líquida vencida, con las firmas de Homar y Montaner, que fueron declarados confesos en su legitimidad, sin que el estado de suspensión de pagos de Homar y Montaner quite al crédito la condición de exigible, pues á parte de haberse solicitado la

nulidad del auto que le declaró en dicho estado, cuyo incidente se encuentra en tramitación, el artículo 1133 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable al caso, ordena que solo se suspenderá el curso de las ejecuciones pendientes contra el deudor cuando llegare á la vía de apremio, antes de procederse á la venta de los bienes, debiendo hacerse lo propio con las ejecuciones que se inicien, con tanto mas motivo cuanto que según los artículos 488 y 532 del Código de Comercio, una obligación es exigible desde su vencimiento, sin que en el caso de autos pueda impedirlo el convenio que Homar y Montaner dicen haber celebrado con sus acreedores en el expediente de suspensión de pagos, pues aunque fuese cierto ese convenio no ha podido tener la aprobación judicial, existiendo como existe el incidente de nulidad mencionado, convenio que tampoco obligaría á Pizá, pues se abstuvo de concurrir á la Junta de acreedores, y bajo concepto alguno ha prestado su conformidad á dicho convenio.— Resultando que abierto el juicio á prueba, se practicaron las propuestas por las partes ejecutante y ejecutada, de las que aparece que Homar y Montaner fueron declarados en suspensión de pagos por auto del Juzgado de Utuado de 21 de Diciembre de 1898 á virtud de escrito presentado en 19 de mismo mes, y que Don Juan Pizá, en escrito de 24 de Enero del año siguiente, se opuso á dicho estado, promoviendo al efecto incidente de nulidad de actuaciones, en el que no ha recaído sentencia firme.— Resultando que el Tribunal del Distrito de San Juan dictó en 6 de Febrero último sentencia confirmatoria de la del Juzgado de 1ª Instancia de San Francisco con las costas, mandando seguir adelante la ejecución hasta hacer trance y remate de los bienes embargados á la sociedad deudora, y con su producto entero y cumplido pago al ejecutante de capital, intereses reclamados vencidos y que se venzan hasta su efectivo pago, y costas.— Resultando que contra esa sentencia interpuso la defensa de Homar y Montaner recurso de casación por infracción de Ley y de doctrina legal, autorizado por el número 1º del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos: — Primero. Los artículos 870 al 873 del Código de Comercio, en relación con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de España en sentencias de 4 de Octubre de 1889, 4 de Enero de 1891 y 14 de Marzo de 1896, según las que, declarado en suspensión de pagos un comerciante, no puede despacharse contra el mismo mandamiento de ejecución.— Segundo. El artículo 1133 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación indebida, ya que dicho artículo no reza con el caso de autos.— Tercero. El artículo 1465 de la misma Ley en su inciso 2º, por haberse desestimado la oposición no declarándose nulo el juicio.— Resultando que á vista se celebró sin asistencia de la parte recurrente.— Visto, siendo ponente el Juez Asociado Don José O. Hernández.— Considerando que los artículos 870, 871, 872 y 873 del Código de Comercio, reformado por Real Decreto de 25 de Junio de 1897 se limitan á fijar los casos en que un comerciante puede declararse en estado de suspensión de pagos, á determinar las formalidades que debe llenar en el ejercicio de semejante derecho, y á ordenar los trámites que deban seguirse, sin que contengan precepto alguno que coarte los derechos de los respectivos acreedores para el ejercicio de sus acciones mientras no exista convenio obligatorio para ellos, como así lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Justicia de España en sentencia de 4 de Diciembre de 1897; y que por tanto la sentencia recurrida no contiene infracción de dichos artículos, cual si de ellos se desprendiera que declarado en suspensión de pagos un comerciante no puede despacharse contra el mismo mandamiento de ejecución.— Considerando que las sentencias del Tribunal Supremo de España de 4 de Octubre de 1889, 4 de Enero de 1891 y 14 de Marzo de 1896, se refieren á casos que no guardan analogía con el de que se trata en el presente recurso, en que se ha reclamado por la vía ejecutiva el cumplimiento de una obligación líquida vencida, pues la primera de ellas solo resuelve que constituida